

48ª REUNION — Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA
(ESPECIAL) — DICIEMBRE 22 Y 23 DE 1987

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese
y Eduardo Alberto Duhalde

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ADAIME, Felipe Teófilo
ADAMO, Carlos
ALASINO, Augusto José M.
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBORNOZ, Antonio
ALDERETE, Carlos Alberto
ALENDE, Oscar Eduardo
ALESSANDRO, Julio Darío
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ÁLVAREZ, Carlos Raúl
ÁLVAREZ ECHAGÜE, Raúl Ángel
ÁLVAREZ GUERRERO, Osvaldo
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARAMBURU, José Pedro
ARAMOUNI, Alberto
ARANDA, Saturnino Dantti
ARCIENAGA, Normando
ARGANARÁS, Heraldo Andrés
ARGANARAZ, Ricardo
ARMAGNAGUE, Juan Fernando
AUYERO, Carlos
ÁVILA, Mario Efraín
ÁVILA GALLO, Exequiel José B.
BADRÁN, Julio
BAGLINI, Raúl Eduardo
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BALANDA, Mariano Pedro
BALL LIMA, Guillermo Alberto
BAUZA, Eduardo
BELLO, Carlos
BIANCIOITTO, Luis Fidel
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BOGADO, Floro Eleuterio
BONIFASI, Antonio Luis
BORDA, Osvaldo
BOTELLA, Orosia Inés
BOTTA, Felipe Esteban
BREST, Diego Francisco
BRIZUELA, Défor Augusto

BUDINO, Eduardo Horacio
BULACIO, Julio Segundo
CACERES, Luis Alberto
CAMBARERI, Horacio Vicente
CANATA, José Domingo
CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CAPPELLERI, Pascual
CARIGNANO, Raúl Eduardo
CARMONA, Jorge
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASAS, David Jorge
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CAVALLA, Domingo Felipe
CLÉRICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CRUCHAGA, Melchor René
CURI, Oscar Horacio
CURTO, Hugo Omar
DALMAU, Héctor Horacio
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DE NICHILO, Cayetano
DEL RÍO, Eduardo Alfredo
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ BANCALARI, José María
DI CAPRIO, Marcos Antonio
DI TELLA, Guido
DIGÓN, Roberto Secundino
DUHALDE, Eduardo Alberto
DUMÓN, José Gabriel
DURAÑONA y VEDIA, Francisco de
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FAPPIANO, Oscar Luján
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ de QUARRACINO, Matilde

FERREYRA, Benito Orlando
FOLLONI, Jorge Oscar
FREYTES, Carlos Guido
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA, Roberto Juan
GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GIACOSA, Luis Rodolfo
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GROSSO, Carlos Alfredo
GUIDI, Emilio Esteban
GUZMÁN, María Cristina
HUARTE, Horacio Hugo
IBARBIA, José María
INGARAMO, Emilio Felipe
JAROSLAVSKY, César
JUEZ PÉREZ, Antonio
KRAEMER, Bernhard
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LEMA MACHADO, Jorge
LESTELLE, Eugenio Alberto
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, José Remigio
LOZA, César Augusto
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KATHY, César
MANRIQUE, Luis Alberto
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARTÍNEZ, Gabriel Adolfo
MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MATZKIN, Jorge Rubén
MÉNDEZ DOYLE de BARRIO, María L.
MERINO, Eubaldo

MILANO, Raúl Mario
 MONJARDIN de MASCI, Ruth
 MONSERRAT, Miguel Pedro
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOREYRA, Omar Demetrio
 MOSCA, Carlos Miguel A.
 MUGNOLO, Francisco Miguel
 MULQUI, Hugo Gustavo
 MUTTIS, Enrique Rodolfo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto A.
 NERI, Aldo Carlos
 ORIETA, Gaspar Baltazar
 ORTIZ, Pedro Carlos
 OSOVNIKAR, Luis Eduardo
 PACCE, Daniel Victorio
 PAMPURO, José Juan B.
 PARENTE, Rodolfo Miguel
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PAZ, Fernando Enrique
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERA OCAMPO, Tomás Carlos
 PEREZ, René
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 POSSE, Osvaldo Hugo
 PRONE, Alberto Josué
 PUEBLA, Ariel
 PUERTA, Federico Ramón
 PUGLIESE, Juan Carlos
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMÍREZ, Ernesto Jorge
 RAMOS, Daniel Omar
 RAMOS, José Carlos
 RAPACINI, Rubén Abel
 REINALDO, Luis Aníbal
 REQUELJO, Roberto Vicente
 RIUTORT de FLORES, Olga E.
 RODRIGO, Osvaldo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 ROMANO NORRI, Julio César A.
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Roberto
 ROSSO, Carlos José
 ROY, Irma

RUCKAUF, Carlos Federico
 SALDUNA, Bernardo Ignacio R.
 SALTO, Roberto Juan
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCASSANI, Benito Gandhi E.
 SELLA, Orlando Enrique
 SILVA, Carlos Oscar
 SILVA, Roberto Pascual
 SIRACUSANO, Héctor
 SOCCCHI, Hugo Alberto
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA AMCH, José María
 SOTELO, Rafael Rubén
 STAVALE, Juan Carlos
 STORANI, Conrado Hugo
 STORANI, Federico Teobaldo M.
 STUBRIN, Marcelo
 TAPARELLI, Juan Carlos
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TOMA, Miguel Ángel
 TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo
 TORRES, Manuel
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TRIACA, Alberto Jorge
 ULLOA, Roberto Augusto
 USIN, Domingo Segundo
 VACA, Eduardo Pedro
 VAIRETTI, Cristóbal Carlos
 VALERGA, Carlos María
 VANOLI, Enrique Néstor
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco
 VEGA ACIAB, José Omar
 VILLEGAS, Juan Orlando
 YOUNG, Jorge Eduardo
 YUNES, Jorge Omar
 ZAFFORE, Carlos Alberto
 ZAVALLEY, Jorge Hernán
 ZINGALE, Felipe
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

AVALOS, Ignacio Joaquín¹
 BARRENO, Rómulo Víctor¹

CARDOZO, Ignacio Luis Rubén¹
 D'ALESSANDRO, Miguel Humberto¹
 ESPINOZA, Nemeo Carlos¹
 GERARDUZZI, Mario Alberto¹
 GIMÉNEZ, Ramón Francisco¹
 IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
 MARÍN, Rubén Hugo¹
 PARRA, Luis Ambrosio¹
 RODRÍGO, Juan¹
 ROGGERO, Humberto Jesús¹

AUSENTES, SIN AVISO

ALBERTI, Lucía Teresa N.
 BARBEITO, Juan Carlos
 BERCOVICH RODRÍGUEZ, Raúl
 CARDO, Manuel
 CARRIZO, Víctor Eduardo
 CASSIA, Antonio
 CEVALLO, Eduardo Rubén P.
 DE LA SOTA, José Manuel
 HERRERA, Dermidio Fernando L.
 IGLESIAS, Herminio
 LENCINA, Luis Ascensión
 LUDER, Ítalo Argentino
 MARTÍNEZ, Luis Alberto
 MIRANDA, Julio Antonio
 ORGAZ, Alfredo
 RAUBER, Cleto
 RÍQUEZ, Félix
 RODRÍGUEZ, José
 ROJAS, Ricardo
 ROMERO, Julio
 ROSALES, Carlos Eduardo
 TORRES, Carlos Martín
 ZOCCOLA, Eleo Pablo

ELECTOS, NO INCORPORADOS:

MANRIQUE, Francisco Guillermo
 NUIN, Mauricio Paulino

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Continuación del cuarto intermedio. (Pág. 4573.)
2. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio, proposiciones de los señores diputados Carignano y Albamonte de que se modifique la hora de reanudación de la sesión propuesta por el señor diputado Jaroslavsky, y manifestaciones de varios señores diputados acerca del trámite de la sesión. Se aprueba la moción con la modificación propuesta por el señor diputado Carignano. (Pág. 4573.)
3. Moción de orden del señor diputado Durañona y Vedia de que se levante la sesión. Es rechazada. (Pág. 4575.)
4. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de pronunciarse sobre la entrada y consideración de diversos asuntos. Se aprueba. (Pág. 4576.)
5. Pronunciamiento de la Honorable Cámara acerca de la entrada e inclusión de diversos asuntos en el temario de la sesión especial. (Pág. 4576.)

6. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se concede al señor presidente de la Nación el permiso constitucional para ausentarse del país durante el año 1988 cuando razones de gobierno así lo requieran (35-S.-87). Se sanciona definitivamente (ley 23.543). (Pág. 4578.)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se ratifica, con las reservas pertinentes, el Convenio 154, sobre fomento de la negociación colectiva, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 19 de junio de 1981 (29-P.E.-87). Se sanciona definitivamente (ley 23.544). (Pág. 4579.)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se modifica la ley 14.250, de convenciones colectivas de trabajo (25-P.E.-87). Se sanciona definitivamente (ley 23.545). (Pág. 4581.)

9. **Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se regula el procedimiento para la negociación colectiva de trabajo (23-P.E.-87). Se sanciona definitivamente (ley 23.546). (Pág. 4581.)**
10. **Moción de orden del señor diputado Pepe de que se aplaze el tratamiento de los restantes asuntos que integran el temario de la sesión especial a efectos de considerar en primer término las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre pago de una remuneración adicional por prestaciones de servicio en la Antártida, en razón del alto riesgo, al personal civil o militar que cumpla funciones al sur del paralelo 60° de latitud Sur (2.908-D.-86). Se aprueba. (Pág. 4590.)**
11. **Consideración del asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. Se sanciona definitivamente (ley 23.547). (Pág. 4591.)**
12. **Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas, de Agricultura y Ganadería y de Previsión y Seguridad Social, recaído en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo (50-P.E.-87), por el que se establece un régimen de ahorro obligatorio y se introducen modificaciones en algunas normas tributarias vigentes. (Pág. 4591.)**
13. **Cuestión reglamentaria planteada por el señor diputado Garay acerca de la necesidad de que la Honorable Cámara se expida respecto del tratamiento sobre tablas del dictamen al que se refiere el número 12 de este sumario a fin de poder considerar de inmediato dicho asunto y pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre la cuestión. (Pág. 4604.)**
14. **Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 12 de este sumario. (Pág. 4605.)**
15. **Moción de orden del señor diputado Garay de que el asunto al que se refieren los números 12 y 14 de este sumario vuelva a comisión. Es rechazada. (Pág. 4630.)**
16. **Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Guzmán con motivo del tratamiento dado al asunto al que se refieren los números 12 y 14 de este sumario, y manifestación de la Presidencia en el sentido de que el planteo no reviste el carácter de cuestión de privilegio. (Pág. 4630.)**
17. **Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 12 y 14 de este sumario. Se sanciona. (Pág. 4631.)**
18. **Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias (11-S.-85). Se sanciona. (Pág. 4632.)**
19. **Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 4641.)**

20. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 4642.)

B. Asuntos entrados:
Comunicaciones del Honorable Senado. (Página 4662.)

C. Inserciones. (Pág. 4662.)

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de diciembre de 1987, a la hora 16 y 9:

1

CONTINUACION DEL CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Pugliese). — Varios señores diputados integrantes de los bloques mayoritarios han solicitado se prorrogue hasta las 18 el cuarto intermedio en que se encuentra la Honorable Cámara. En consecuencia, en virtud de las facultades que acuerda a esta Presidencia el artículo 157 del reglamento, se continuará llamando hasta la hora indicada.

—Se continúa llamando.

—A la hora 20 y 32:

2

MOCIONES Y MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: formulo moción de orden en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta las 22.

Sr. Clérico. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Clérico. — Señor presidente: quiero preguntar al señor diputado Jaroslavsky —con el permiso de la Presidencia— si realmente considera que un cuarto intermedio de poco más de una hora y media hará posible que la Cámara aborde los asuntos que se supone debe tratar. Formulo esta pregunta teniendo en cuenta las deliberaciones que durante largas semanas han estado llevando a cabo el radicalismo y el peronismo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Quiero responder al señor diputado afirmativamente.

destinar su producido a mejorar las jubilaciones y pensiones. Por eso propongo que se incorpore en este título un artículo que exprese lo siguiente: "Los fondos recaudados serán imputados únicamente al pago de jubilaciones y/o pensiones. Entre el lapso que medie entre su percepción y efectivo pago podrán ser depositados en el sistema bancario oficial a fin de que deven-guen interés. Cualquier otro destino que se les asigne hará incurrir al funcionario que lo autorice en el delito penado por el artículo 260 del Código Penal."

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rodríguez (Jesús). — Señor presidente: quiero informar al señor diputado Ruckauf sobre algunas cuestiones discutidas en el seno de las comisiones que aclararán su inquietud.

En primer lugar, la voluntad política de que el producido de estos fondos sea destinado pura y exclusivamente a la remuneración del sector pasivo fue anunciada por el señor presidente de la Nación, quien firma el mensaje que acompaña al proyecto del Poder Ejecutivo. Y precisamente este proyecto no ha sido modificado esencialmente por el dictamen de la comisión, razón por la cual no existe una brecha entre el objetivo deseado y la instrumentación formal de la redacción del articulado.

En segundo lugar, el bloque de la Unión Cívica Radical, a través del presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, diputado Martínez Márquez, estableció en la reunión realizada en horas de la tarde de ayer que los fondos destinados a las provincias deben afectarse al pago de las jubilaciones. En el orden nacional ello estaba explícito desde el principio.

Por estas razones la comisión no acepta la propuesta del señor diputado preopinante. Creo que están asegurados los objetivos deseados, pero ratificamos la decisión política de garantizar que los producidos de estos impuestos serán destinados pura y exclusivamente al pago de las remuneraciones de la clase pasiva.

Sr. Auyero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Auyero. — Señor presidente: aun dentro de la precariedad de nuestro entendimiento respecto de la aclaración que se formula, mi bloque va a acompañar con su voto la propuesta del señor diputado Ruckauf porque entendemos que de ese modo quedaría más clara la interpretación del objetivo de esta norma. Consideramos que el agregado es pertinente dada la imputación que debe tener el gravamen.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Monserrat. — Señor presidente: coincidimos con la propuesta formulada por el señor diputado Ruckauf porque creemos que se debe garantizar de manera expresa y explícita que el destino de estos fondos es incrementar las remuneraciones de los jubilados y pensionados, que como es público y notorio se encuentran en niveles muy bajos.

Más del 90 por ciento de los beneficiarios —es casi irónico utilizar este término— del sistema nacional de previsión social está percibiendo el valor mínimo, de manera que estimamos que es bueno y oportuno que quede expresamente determinado que estos recursos serán aplicados a esa finalidad.

Por las razones expuestas votaremos afirmativamente la propuesta presentada por el señor diputado Ruckauf.

Sr. Presidente (Pugliese). — En primer lugar se va a votar el título VI según el texto del dictamen en consideración.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el agregado propuesto al título VI por el señor diputado por la Capital.

— Resulta negativa de 82 votos; votan 152 señores diputados sobre 154 presentes.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el título VII.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los títulos VIII a X.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Honorable Senado.

18

REGIMEN TRANSITORIO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS FISCALES ENTRE LA NACION Y LAS PROVINCIAS

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias (expediente 11-S-85).

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice (Página 4644).

Sr. Jaroslavsky. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: como se trata de un proyecto extenso, cuya lectura demandaría un tiempo excesivo, y como por otra parte entiendo que el dictamen es del conocimiento de los señores diputados, sugiero que se omita su lectura, sin perjuicio de la inclusión del texto respectivo en el Diario de Sesiones a esta altura del desarrollo de la sesión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se procederá conforme a lo solicitado por el señor diputado por Entre Ríos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Habiendo asentimiento, se omitirá la lectura.

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre régimen transitorio de participación en el producido de los impuestos nacionales por parte de las provincias, con vigencia para el ejercicio fiscal 1985 y hasta tanto se sancione el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja su sanción de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Régimen transitorio de distribución

Artículo 1º — Establécese, a partir del 1º de enero de 1988, el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, conforme a las previsiones de la presente ley.

Art. 2º — La masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las siguientes excepciones:

- Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4º de la Constitución Nacional;
- Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación;
- Los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta ley, con su actual estructura, plaza de vigencia y destino. Cumplido el objeto

de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta ley;

- Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por ley del Congreso Nacional con adhesión de las legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.

Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.

Asimismo consideráranse integrantes de la masa distribuable, el producido de los impuestos, existentes o a crearse, que gravan la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la medida en que su recaudación exceda lo acreditado al fondo de combustibles creado por dicha ley.

Art. 3º — El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la siguiente forma:

- El cuarenta y dos con treinta y cuatro centésimos por ciento (42,34 %) en forma automática a la Nación;
- El cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento (54,66 %) en forma automática al conjunto de provincias adheridas;
- El dos por ciento (2 %) en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias:

	%
Buenos Aires	1,5701
Chubut	0,1433
Neuquén	0,1433
Santa Cruz	0,1433

- El uno por ciento (1 %) para el fondo de aportes del Tesoro nacional a las provincias.

Art. 4º — La distribución del monto que resulte por aplicación del artículo 3º inciso b) se efectuará entre las provincias adheridas de acuerdo con los siguientes porcentajes:

	%
Buenos Aires	19,93
Catamarca	2,86
Córdoba	9,22
Corrientes	3,86
Chaco	5,18
Chubut	1,38
Entre Ríos	5,07
Formosa	3,78
Jujuy	2,95
La Pampa	1,95
La Rioja	2,15

	%
Mendoza	4,33
Misiones	3,43
Neuquén	1,54
Río Negro	2,62
Salta	3,98
San Juan	3,51
San Luis	2,37
Santa Cruz	1,38
Santa Fe	9,28
Santiago del Estero	4,29
Tucumán	4,94

Art. 5º — El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º de la presente ley se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación.

El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación. El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma alguna que supere el monto resultante de la aplicación del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las distribuciones de fondos regidos por esta ley salvo las previstas por otros regímenes especiales o créditos específicos del presupuesto de gastos de administración de la Nación.

Art. 6º — El Banco de la Nación Argentina, transferirá automáticamente a cada provincia y al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, el monto de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la presente ley.

Dicha transferencia será diaria y el Banco de la Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta ley.

Art. 7º — El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley.

CAPÍTULO II

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley

Art. 8º — La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al territorio nacional de la Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987. Además la Nación, asume en lo que resulte aplicable, las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos ad-

Art. 9º — La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga:

- a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas;
- b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley.

En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos, ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley. Esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las actividades, bienes y elementos vinculados a la producción, comercialización, almacenamiento, transporte, circulación, venta, expendio o consumo de los bienes sujetos a impuestos internos específicos a los consumos y las materias primas o productos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán con una imposición proporcionalmente mayor —cualquiera fuere su característica o denominación— que la aplicada a actividades, bienes y elementos vinculados con bienes y servicios análogos o similares y no sujetos a impuestos internos específicos a los consumos. El expendio al por menor de vinos y bebidas alcohólicas podrá, no obstante, ser objeto de una imposición diferencial en jurisdicciones locales. De la obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente los impuestos provinciales sobre la propiedad inmobiliaria sobre los ingresos brutos, sobre la propiedad, radicación, circulación o transferencia de automotores, de sellos y transmisión gratuita de bienes, y los impuestos o tasas provinciales y/o municipales vigentes al 31-12-84 que tuvieran afectación a obras y/o inversiones, provinciales o municipales dispuestas en las normas de creación del gravamen, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.

1. En lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos brutos, los mismos deberán ajustarse a las siguientes características básicas:

—Recaerán sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales, con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual, excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos.

—Se determinarán sobre la base de los ingresos del período, excluyéndose de la base

imponible los importes correspondientes a impuestos internos, impuesto al valor agregado —débito fiscal— e impuesto para los fondos Nacional de Autopistas, Tecnológico, del Tabaco y de los Combustibles.

Esta deducción sólo podrá ser efectuada por los contribuyentes de derechos de los gravámenes citados, en tanto se encuentren inscritos como tales. El importe a computar será el del débito fiscal o el del monto liquidado, según se trate del impuesto al valor agregado o de los restantes gravámenes, respectivamente y en todos los casos, en la medida en que correspondan a las operaciones de actividad sujeta a impuesto, realizadas en el período fiscal que se liquida.

—En casos especiales la imposición podrá consistir en una cuota fija en función de parámetros relevantes,

—Podrán gravarse las actividades conexas a las exportaciones (transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza).

—Podrán gravarse las actividades cumplidas en lugares de interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado nacional (puertos, aeropuertos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimientos y todo otro de similar naturaleza), en tanto la imposición no interfiera con ese interés o utilidad.

—En materia de transporte interjurisdiccional la imposición se efectuará en la forma prevista en el convenio multilateral a que se refiere el inciso d).

—En materia de transporte internacional efectuado por empresas constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el país tenga suscritos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposición en la materia, de los que surja —a condición de reciprocidad— que la aplicación de gravámenes queda reservada únicamente al país en el cual estén constituidas las empresas, no podrá aplicarse el impuesto.

—En materia de combustibles derivados del petróleo, con precio oficial de venta, la imposición no alcanzará a la etapa de producción en tanto continúe en vigencia la prohibición en tal sentido contenida en el decreto ley 505/58 y sus modificaciones.

En las etapas posteriores podrá gravarse la diferencia entre los precios de adquisición y de venta.

—Las actividades o rubros complementarios de una actividad principal —incluidos financiamiento y ajuste por desvalorización monetaria— estarán sujetos a la alícuota que contemple para aquella.

—Para la determinación de la base imponible se computarán los ingresos brutos devengados en el período fiscal, con las siguientes excepciones:

- 1) Contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar registros contables: será el total de los ingresos percibidos en el período.
- 2) En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en el régimen de la ley 21.526 se considerará ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período.
- 3) En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses, se considerará ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que vencieren en cada período.

—Los períodos fiscales serán anuales, con anticipos sobre base cierta que, en el caso de contribuyentes comprendidos en el régimen del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, comprenderán períodos mensuales.

—Los contribuyentes comprendidos en el convenio multilateral del 18 de agosto de 1977 pagarán el impuesto respectivo en una única jurisdicción. Para ello, las jurisdicciones adheridas deberán concertar la mecánica respectiva y la uniformidad de las fechas de vencimiento.

2. En lo que respecta al impuesto de sellos recaerá sobre actos, contratos y operaciones de carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la ley 21.526.

Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionados en la primera parte del párrafo anterior, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes.

La imposición será procedente, tanto en el caso de concertaciones efectuadas en la respectiva jurisdicción, como en el de las que, efectuadas en otras, deban cumplir efectos en ella, sean lugares de dominio privado o público, incluido puertos, aeropuer-

tos, aeródromos, estaciones ferroviarias, yacimientos, y demás lugares de interés público o utilidad nacional sometidos a la jurisdicción del Estado nacional, en tanto esa imposición no interfiera con tal interés o utilidad.

Cuando se trate de operaciones concertadas en una jurisdicción que deban cumplimentarse en otra u otras, la Nación y las provincias incorporarán a sus legislaciones respectivas cláusulas que contemplen y eviten la doble imposición interna;

- c) Que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no graven por vía de impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos, cualquiera fuera su característica o denominación, los productos alimenticios en estado natural o manufacturado. Para el cumplimiento de esta obligación se aplicará lo dispuesto en el segundo a cuarto párrafo del inciso anterior;
- d) Que continuarán aplicando las normas del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977 sin perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones de éste, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos;
- e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo local y en su caso la autoridad ejecutiva comunal, suspender su aplicación dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de notificación de la decisión que así lo declare;
- f) Que se obliga a suspender la participación en impuestos nacionales y provinciales de las municipalidades que no den cumplimiento a las normas de esta ley o las decisiones de la Comisión Federal de Impuestos;
- g) Que se obliga a establecer un sistema de distribución de los ingresos que se originen en esta ley para los municipios de su jurisdicción, el cual deberá estructurarse asegurando la fijación objetiva de los índices de distribución y la remisión automática y quincenal de los fondos.

CAPÍTULO III

De la Comisión Federal de Impuestos

Art. 10. — Ratifícase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará constituida por un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida. Estos representantes deberán ser personas especializadas en materia impositiva a juicio de las jurisdicciones designantes. Asimismo la Nación y las provincias designarán cada una de ellas un representante suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares; el asiento estará en el Ministerio de Economía de la Nación.

Tendrá un Comité Ejecutivo el que estará constituido y funcionará integrado por el representante de la Nación y los de ocho (8) provincias.

A los efectos de modificar su propio reglamento deberá constituirse en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos los dos tercios de los estados representados.

Este reglamento determinará los asuntos que deberán ser sometidos a sesión plenaria, establecerá las normas procesales pertinentes para la actuación ante el organismo y fijará la norma de elección y duración de los representantes provinciales que integran el Comité Ejecutivo, entre los cuales figurarán los de aquellas provincias cuya participación relativa en la distribución de recursos prevista en el artículo 4º, supere el nueve por ciento (9%).

La comisión formulará su propio presupuesto y sus gastos serán sufragados por todos los adherentes, en proporción a la participación que les corresponda en virtud de la presente ley.

Art. 11. — Tendrá las siguientes funciones:

- a) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución;
- b) Controlar la liquidación de las participaciones que a los distintos fiscos corresponde, para lo cual la Dirección General Impositiva, el Banco de la Nación Argentina y cualquier otro organismo público nacional, provincial o municipal, estarán obligados a suministrar directamente toda información y otorgar libre acceso a la documentación respectiva, que la comisión solicite;
- c) Controlar el estricto cumplimiento por parte de los respectivos fiscos de las obligaciones que contraen al aceptar este régimen de distribución;
- d) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio de Economía de la Nación, de las provincias o de las municipalidades si los gravámenes nacionales o locales se oponen o no y, en su caso, en qué medida a las disposiciones de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de las obligaciones de aquellos de cumplir las disposiciones fiscales pertinentes;
- e) Dictar normas generales interpretativas de la presente ley;
- f) Asesorar a la Nación y a los entes públicos locales, ya sea de oficio o a pedido de partes, en las materias de su especialidad y, en general, en los problemas que cree la aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado expresamente a otra autoridad;
- g) Preparar los estudios y proyectos vinculados con los problemas que emergen de las facultades impositivas concurrentes;
- h) Recabar del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Consejo Federal de Inversiones y de las reparticiones técnicas nacionales respectivas, las informaciones necesarias que interesen a su cometido;

- i) Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional.

En el reglamento a que se refiere el artículo anterior se podrá delegar el desempeño de algunas de las funciones o facultades en el Comité Ejecutivo.

Art. 12. — Las decisiones de la comisión serán obligatorias para la Nación y las provincias adheridas, salvo el derecho a solicitar revisión debidamente fundada dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha de notificación respectiva. Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con las dos terceras partes de sus miembros. La decisión respectiva se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes, será definitiva de cumplimiento obligatorio y no se admitirá ningún otro recurso ante la comisión, sin perjuicio del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo al artículo 14 de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de aquella decisión.

Art. 13. — La jurisdicción afectada por una decisión de la Comisión Federal de Impuestos deberá comunicar a dicho organismo, dentro de los noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la decisión no recurrida, o de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de notificación de la decisión recaída en el período de revisión según los términos del artículo 12, en su caso, las medidas que haya adoptado para su cumplimiento.

Vencidos dichos plazos sin haberse procedido en consecuencia, la Comisión Federal de Impuestos dispondrá lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla, los importes que le correspondan sobre lo producido del impuesto a distribuir análogo al tributo impugnado, hasta tanto se de cumplimiento a la decisión del organismo.

Art. 14. — Los contribuyentes afectados por tributos que sean declarados en pugna con el régimen de la presente ley, podrán reclamar judicial o administrativamente ante los respectivos fiscos, en la forma que determine la legislación local pertinente, la devolución de lo abonado por tal concepto sin necesidad de recurrir previamente ante la Comisión Federal de Impuestos.

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

Art. 15. — La presente ley regirá desde el 1º de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989. Su vigencia se prorrogará automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo del presente.

Art. 16. — El derecho a participar en el producido de los impuestos a que se refiere la presente ley queda supeditado a la adhesión expresa de cada una de las provincias, la que será comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio del Interior y con conocimiento del Ministerio de Economía.

Si transcurridos ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente ley, alguna provincia

no hubiera comunicado su adhesión, se considerará que la misma no ha adherido al régimen y los fondos que le hubieran correspondido —incluidos los que deberá reintegrar por dicho período y que le hubieran sido remitidos a cuenta de su adhesión—, serán distribuidos entre las provincias adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.

En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en el párrafo anterior, la participación corresponderá a partir de la fecha de recepción de la comunicación de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse valer derechos respecto de recaudaciones realizadas con anterioridad.

Art. 17. — Con relación a la distribución de fondos entre la Nación y cada una de las provincias, efectuada desde el 1º de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1987, las partes no podrán efectuar reclamo administrativo alguno, quedando expedita la vía judicial.

Art. 18. — Las obras del Fondo de Desarrollo Regional que se encuentren autorizadas, en proceso de licitación, contratadas o en ejecución al 31 de diciembre de 1987 así como las deudas generadas por las mismas, serán continuadas hasta su finalización y atendidas con cargo al presupuesto nacional, en las condiciones actuales establecidas entre las provincias y el Ministerio del Interior.

Art. 19. — Quedan convalidadas las gestiones realizadas por la Comisión Federal de Impuestos a partir del 1º de enero de 1985, en base a la creación y funciones determinadas por la ley 20.221 y sus modificatorias.

Art. 20. — A los efectos del artículo 7º de la presente ley, la Contaduría General de la Nación determinará antes del 15 de febrero del año siguiente, si se ha distribuido un monto equivalente al porcentual garantizado por el mecanismo del mencionado artículo, en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido.

En caso de resultar inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado a las provincias antes del 30 de abril del mismo año, en función de los porcentuales de distribución previstos en el artículo 3º, inciso c) y artículo 4º de la presente ley.

CAPÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 21. — Créase la Comisión para el Análisis de las Políticas de Empleo, Salarial y de Condiciones de Trabajo de los Servicios a que hace referencia el inciso a) del presente artículo. La comisión estará integrada por dos (2) representantes del gobierno nacional y siete (7) de los gobiernos provinciales.

La comisión tendrá por funciones:

- a) Realizar un estudio comparado de las diferencias en el nivel salarial y de condiciones de trabajo en los servicios prestados en forma concurrente por los dos niveles de gobierno; este cometido deberá cumplimentarlo en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su constitución efectiva;

- b) Proponer cláusulas de garantía salarial en casos debidamente fundamentados y que obligarían recíprocamente a ambas jurisdicciones de gobierno.

Las recomendaciones de la comisión servirán de base para la formulación de una ley que regule la política de empleo, condiciones de trabajo y salarios para los servicios que se determinen. El proyecto de ley deberá ser remitido al Congreso Nacional antes del 31 de marzo d) 1988.

Art. 22. — El gobierno nacional reconocerá la incidencia efectiva sobre los gastos en personal de la administración central de las provincias, de los incrementos salariales acumulados que disponga para la administración central nacional en el período enero-marzo de 1988, si superan en más de diez (10) puntos la variación acumulada del índice de precios al consumidor en dicho período. La garantía de este artículo se calculará en base a las pautas siguientes:

- a) El incremento de salarios en la administración central nacional se calculará considerando la remuneración por todo concepto promedio de todos los agentes;
- b) Se abonará el costo del exceso por sobre los diez (10) puntos sólo en la medida en que la remuneración por todo concepto en cada provincia, para cada servicio en particular, al 31 de marzo de 1988, sea inferior a la vigente en la administración central nacional; en caso de ser inferiores las remuneraciones provinciales, la garantía se abonará, como límite, hasta alcanzar la remuneración vigente en la administración central nacional;
- c) Para la base de cálculo del monto de salarios en la administración central se utilizará el índice que confeccionará la Dirección Nacional de Programación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de la Nación; para precios al consumidor se utilizarán los índices publicados por el INDEC; para las plantas de personal de las provincias se computarán las efectivamente ocupadas al 31-12-87, para lo cual los gobiernos provinciales deberán informar a la Secretaría de Hacienda estos guarismos, dentro de los treinta (30) días de la sanción de la presente.

Los pagos a que hubiere lugar por parte del gobierno nacional serán efectivizados antes del 30-4-88.

La Nación se obliga a no cubrir las vacantes ni incrementar las plantas del personal de la administración central nacional existente el 31-12-87. Las provincias percibirán las sumas resultantes de la garantía de este artículo cuando correspondiere y sólo en el caso que no incrementasen las plantas de personal ni cubriesen las vacantes existentes al 31-12-87.

Las provincias que otorguen incrementos salariales a sus agentes que superen, en promedio para la administración central, en diez puntos

la variación acumulada del índice de precios al consumidor, en tanto estos incrementos superen los otorgados para la administración central nacional, se entenderá que renuncia a participar en la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro nacional, instituido en el inciso d) del artículo 3º de la presente ley.

Las disposiciones de este artículo regirán hasta el 31 de marzo de 1988.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Salda de la comisión, 22 de diciembre de 1987.

Jesús Rodríguez. — Antonio Albornoz. — Heraltio A. Argañarás. — Raúl E. Baglini. — Domingo F. Cavallo. — Lorenzo J. Cortese. — Héctor H. Dalmáu. — Eduardo A. Del Río. — Guido Di Tella. — Oscar S. Lamberto. — Jorge R. Matzkin. — Itatí M. Milano. — Hugo G. Mulqui. — Osvaldo H. Posse. — Ariel Puebla. — Guillermo E. Tello Rosas.

En disidencia parcial:

Guillermo E. Estévez Boero.

INFORME

Esta Comisión de Presupuesto y Hacienda en la redacción del informe del proyecto que establece un régimen transitorio de distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, considera importante resaltar el marco de discusión y debate entre las distintas partes que dio como resultado esta ley acuerdo. Es la primera vez que una ley de coparticipación de recursos fiscales nace del debate y posterior acuerdo entre la Nación y las distintas provincias de nuestro país. Las anteriores leyes de este tipo así hubieran surgido de gobiernos democráticos y populares, siempre llegaron a este Parlamento desde el Poder Ejecutivo sin el imprescindible tamiz del debate con los Estados provinciales. El hecho que surja de esta forma fortalece nuestro sistema democrático porque demuestra que puede darle solución a serios conflictos sin autoritarismo ni maquillajes que los disimulen.

En esta nueva etapa del desarrollo social parece ser que la eficiencia del Estado se corresponde con la descentralización, asociada en nuestra Constitución como Estado Nacional al sistema federal de gobierno. El Estado Nacional debe delegar en las provincias todos aquellos bienes públicos capaces de ser fraccionados, a la vez, que los mecanismos impositivos que se necesitan para financiarlos.

Mediante el aumento de la participación de las provincias en el total recaudado se logrará poner en claro la situación financiera de los Estados provinciales que para poder pagar sus gastos desbordaban los recursos coparticipados y recurrían en definitiva a adelantos del Tesoro Nacional.

Este proyecto cubrirá el vacío legal que se abrió en 1984 hasta tanto se formule un proyecto de Coparticipación.

pación Federal de Impuestos que contemple el mediano y largo plazo. Deben reexaminarse las funciones del Estado y dentro de ellas las que deban corresponder a la Nación y a las provincias, ligando éstas con la responsabilidad en la recaudación de los recursos para financiarlas.

Sin embargo en este régimen transitorio están las bases del futuro proyecto a elaborarse ya que garantiza los objetivos fundamentales de la autonomía financiera de las provincias, la estabilidad de las normas y la automatización de los flujos financieros. En estos elementos está la base del respeto a la Constitución Nacional y a su forma de gobierno federal.

Jesús Rodríguez.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 26 de junio de 1985.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese un régimen transitorio de participación en el producido de los impuestos nacionales por parte de las provincias, con vigencia para el ejercicio fiscal 1985 y hasta tanto se sancione el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Art. 2º — En virtud de lo establecido en el artículo 1º, el Tesoro nacional transferirá a las ciudades jurisdicciones, durante el año 1985, quinientos diez mil millones de pesos argentinos (\$a 510.000.000.000), de acuerdo a la distribución de la planilla anexa que forma parte de la presente ley.

Dicho importe comprende los conceptos de Coparticipación Federal de Impuestos, Coparticipación para los Sistemas de Seguridad Social Provinciales y Aportes no Reintegrables del Tesoro nacional, sin afectación a programas específicos que existieran hasta el 31 de diciembre de 1984 y prorrogados o habilitados para el presente ejercicio 1985; programas éstos que no quedan afectados por esta ley, ni cuyas remesas por estos conceptos son deducibles, en ningún caso, de las sumas que se determinen, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º a 7º de esta ley.

Art. 3º — Por los conceptos a que se refiere el artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá efectuar a cada provincia las siguientes transferencias: a) Diariamente la suma que corresponda por la recaudación de los ingresos comprendidos dentro de los conceptos de coparticipación, en la proporción establecida por cada provincia en la planilla anexa; b) Durante el mes y hasta el antelúltimo día hábil del mismo, la suma necesaria para completar la doceava parte del total fijado en el artículo 2º. Esta

doceava parte se determinará incrementando su monto con la actualización que se establece en el artículo siguiente.

Art. 4º — La actualización de los importes mensuales señalados en el artículo 3º, deberá realizarse mediante la aplicación de un índice que se elaborará en base a lo que se establece a continuación. El valor base de dicho índice surgirá del promedio del registro correspondiente al mes de noviembre de 1984 en los índices de precios al por mayor-nivel general, y de precios al consumidor-nivel general, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ponderados por 1/3 y 2/3 respectivamente.

El componente variable del índice, o sea el numerador, será el promedio de los registros de los citados índices, con idéntica ponderación, referidos al mes inmediato anterior al que corresponda la cuota de transferencia o al de su efectiva remesa, el que sea posterior.

En el caso que se exceda el plazo establecido en el artículo 3º, el valor actualizado de las cuotas será incrementado, además, en el porcentual que establece el Banco Central de la República Argentina para los atrasos o incumplimientos de los bancos provinciales en sus obligaciones para con aquél.

Art. 5º — La presente ley se aplicará a partir del 1º de enero de 1985. Dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha de sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo transferirá a las provincias las diferencias que pudieran existir entre los valores mensuales determinados de acuerdo con el presente régimen y los fondos efectivamente enviados por los conceptos a los que se refiere el artículo 2º.

Dichas diferencias se actualizarán según el procedimiento establecido en el artículo 4º, empleando al efecto, y para cada mes transcurrido, los índices promedios utilizados para el cálculo correspondiente a cada uno de tales meses y el del mes en el que se salden las diferencias. En caso de excederse el plazo establecido en el presente artículo, se incrementarán los importes de acuerdo a lo determinado en la última parte del artículo 4º.

Art. 6º — El Tesoro nacional contribuirá en su totalidad al financiamiento de los déficit presupuestarios de las provincias correspondientes al ejercicio fiscal 1984 mediante un aporte no reintegrable.

Art. 7º — El monto resultante del artículo 6º será transferido dentro de los ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley, conjuntamente con la actualización e incremento por mora, que se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º.

Art. 8º — Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los créditos presupuestarios pertinentes, a los fines del cumplimiento de la presente ley, quedando facultado a modificar el resultado del ejercicio, como asimismo, a hacer uso de los mecanismos de corto plazo de la Tesorería General hasta tanto se ponga en ejecución el Presupuesto General de la Administración Nacional para 1985, en que se procederá a la imputación correspondiente.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Macris.

PLANILLA ANEXA

Jurisdicción	Monto a transferir durante 1985 \$a
Buenos Aires	86.954.810.000
Catamarca	14.869.620.000
Córdoba	47.379.840.000
Corrientes	19.965.460.000
Chaco	26.346.800.000
Chubut	10.119.130.000
Entre Ríos	26.346.800.000
Formosa	19.606.690.000
Jujuy	15.181.180.000
La Pampa	10.119.130.000
La Rioja	11.172.570.000
Mendoza	20.498.150.000
Misiones	17.804.390.000
Neuquén	10.119.130.000
Río Negro	13.060.850.000
Salta	20.646.730.000
San Juan	18.210.370.000
San Luis	12.334.570.000
Santa Cruz	10.119.130.000
Santa Fe	49.513.880.000
Santiago del Estero	22.291.010.000
Tucumán	26.787.060.000
Total	510.000.000.000

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Si ningún señor diputado hace uso de la palabra, se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Juez Pérez. — Como desgraciadamente la votación en general del proyecto fue muy rápida, la consideración en particular del artículo 1º —que no tengo a la vista— me permite hacer algunas observaciones que creo que la Cámara no podrá dejar de atender, a pesar de que hasta ahora mis observaciones siempre han caído en saco roto.

Si es cierto, como tengo entendido, que la redacción del proyecto estuvo principalmente a cargo de los señores ministros de Hacienda de las provincias, debo acusarlos de no haber sabido defender los intereses provinciales.

La Constitución Nacional determina que la recaudación de los impuestos directos pertenece a las provincias y que la Nación no puede acudir a ella sino en época y momentos declarados de suma urgencia y por tiempo determinado. Pero no es ese el caso y los impuestos de los que trata el proyecto que estamos votando son los que las provincias han reservado para sí y de los que la Nación no tiene derecho a tomar parte alguna.

Los impuestos indirectos son facultad concurrente entre la Nación y las provincias, y por lo tanto y a los fines de evitar el desastre impositivo que crearía la doble imposición tributaria nacional y provincial dentro del territorio del país, se ha concebido el sistema de la coparticipación federal.

Pero resulta que estos impuestos internos han sido eliminados de este proyecto de ley. Fundamentalmente, los únicos que quedan son los impuestos directos, en los que la Nación no debe meter la mano, aunque desde hace tiempo les ha echado el zarpazo. Con mayor motivo lo hará una vez convertido en ley este proyecto.

Es correcto que la Capital Federal y la Tierra del Fuego intervengan en este tema y que la Nación, en calidad de gobierno local, se sienta con las provincias alrededor de la misma mesa para tratar con ellas, en condiciones de igualdad, el problema de cómo repartir lo recaudado por estos impuestos entre los gobiernos locales; pero lo que no puede hacer —aunque lo ha estado haciendo hasta hace muy poco— es llevarse el 48,5 por ciento y dejar otro tanto para las provincias y un 3 por ciento para las más necesitadas. La Nación ha estado sacándonos dinero de los bolsillos gracias a la ceguera de las provincias. Y ahora este Congreso, integrado por representantes provenientes de las provincias, está consintiendo y apoyando este saqueo. Creo que no es posible que haya un sólo legislador provincial que lo acepte. Considero que este proyecto no puede prosperar. Esta ley tiene que ser por convenio desde su origen y no por adhesión.

Debe haber una conversación más seria con gente que entienda el problema, y no viniendo a golpear las puertas como mendicantes para pedir un punto más, creyendo que si se lo obtiene es un éxito, cuando en realidad ello implica volver a las provincias con migajas y sin resolver el problema de fondo. Esto no puede ser. No hay un estudio real ni lo puede haber, porque no se sabe cuánto ingresa en concepto de impuestos a las arcas nacionales. La Nación resuelve lo que quiere y hasta suprime los fondos especiales, como el del tabaco; no se sabe si lo que hace está

bien o mal, pero fundamentalmente está mal que se atribuya por medio de este Congreso facultades que la Constitución Nacional no le reconoce, puesto que ésta atribuye a las provincias la facultad de convenir medidas que tiendan a promover el bienestar general, incluyendo cuestiones económicas y financieras, con conocimiento del Congreso Nacional. Distinto sería el caso si las provincias promueven esta ley después de haber hecho el convenio pertinente. Lo que no puede haber es una ley previa al convenio, y menos aun una que imponga a las provincias la carga de adherirse en un plazo determinado bajo la amenaza de tener que devolver los recursos que hayan percibido en el interín.

Nada dice el proyecto del dinero que la Nación les ha quitado a las provincias. No se puede silenciar todo esto. No puede ser que los representantes del pueblo de la Nación Argentina, cada uno de los cuales viene de su terruño, estén dispuestos a aprobar esto sin siquiera leerlo. Porque hasta se ha decidido omitir la lectura. No tengo nada más que agregar en la consideración de este artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 1º.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 2º a 22.

— El artículo 23 es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley¹.

Habiéndose introducido modificaciones en la sanción producida por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: solicito autorización de la Cámara para insertar en el Diario de Sesiones el informe correspondiente al proyecto de ley que acaba de ser sancionado, cuya exposición hemos omitido en mérito a la celeridad que requería esta sesión, dado lo avanzado de la hora.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si se efectúa en el Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por Mendoza.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: solicito que quede abierta la posibilidad de que los señores diputados que así lo deseen inserten en el Diario de Sesiones los textos de sus opiniones sobre el proyecto de ley de régimen transitorio de distribución de los recursos.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Honorable Cámara debe autorizar a la Presidencia para que pueda recibir las inserciones que soliciten los señores diputados.

Si hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se harán las inserciones solicitadas¹.

La Presidencia se permite encarecer a los señores diputados la observancia de las disposiciones reglamentarias referentes al término dentro del cual deben ser entregadas las inserciones aprobadas, a fin de que los textos correspondientes puedan ser incorporados en el Diario de Sesiones de la presente reunión.

19

MOCION

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Jaroslavsky. — Señor presidente: formulo moción de orden de que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 17 horas.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Entre Ríos.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 23 de diciembre a las 17 horas.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 4 y 13 del día 23.

LORENZO D. CEDROLA.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4656.)

¹ Véase el texto de las inserciones entregadas a la Secretaría, a partir de la página 4680.

ción, se volvió racional y progresivo al permitirse su cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias exceptuándose a las cooperativas así como a los cheques menores de 700 australes, permitiéndose en esa categoría un endoso. Las deducciones personales para la cuarta categoría fueron aumentadas de \$1.500 por mes a más de \$2.500, aliviando el impacto en los sectores medios bajos.

Dos impuestos fueron en cambio poco modificados, precisamente porque afectaban a los sectores de ingresos más altos: el ahorro forzoso, donde así y todo mejoró la indexación, y la postergación de los quebrantos impositivos, medida que afecta a las 200 empresas principales del país. En síntesis: hubo un conjunto de mejoras importantes, con una clara dirección.

Pero todo esto es insuficiente. Es consustancial completar el paquete con un replanteo profundo del presupuesto, discusión en la que nos volveremos a encontrar.

El gasto no puede seguir así. En el año 1988 el gobierno pretende gastar 270 millones de dólares para el traslado de la Capital y, más grave aún, pagar 2.100 millones de dólares para atender la mitad de los servicios

de la deuda. Hay otros gastos, como por ejemplo los originados por la práctica escandalosa de adjudicaciones directas —ya por más de 1.000 millones de dólares— o por la asignación incorrecta de las inversiones en general y de las energéticas en particular. Pero esa batalla será para febrero y marzo del año próximo, en ocasión de la discusión del presupuesto. Cambios más profundos deberán empero esperar al '89; de esto los radicales no entienden o no quieren entender. Por ahora sólo evitamos un desastre económico cierto, a un determinado costo económico y —no se nos escapa— político. Nos hemos asegurado el érito, y éste depende de lo que se haga en el futuro. Pero quizás el hecho más destacable es que todos nos demos cada vez más cuenta de que estamos en el mismo barco y que si no cooperamos, incluso para paliar errores ajenos, cada uno desde su identidad y desde su posición, no lograremos sobrellevar la trágica situación económica en la que se debate el país y la población, sobre todo la más humilde. Faltan aún dos años y tenemos que tratar de que la cosa no empeore, o que ello sea lo menos posible. Y tenemos que prepararnos para el cambio serio y profundo que el país necesita.

2. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAGLINI

Informe acerca del proyecto de ley sobre régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias

Señor presidente:

En mi carácter de miembro informante por la bancada mayoritaria, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley por el que se establece un régimen transitorio de distribución de impuestos entre la Nación y las provincias. Este proyecto prevé que la ley tenga vigencia entre el 1º de enero de 1988 y el 31 de diciembre de 1989, estableciendo asimismo que se prorrogará automáticamente ante la inexistencia de un régimen sustitutivo. Durante este período se continuará avanzando hacia la formulación de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos, elaborado con la perspectiva de mediano y largo plazo, reexaminando la distribución de funciones y recursos de ambos niveles de gobierno y teniendo presente los objetivos de garantizar la autonomía de las provincias, la estabilidad de las normas y la automatización de los flujos financieros.

El régimen de coparticipación federal de impuestos se inició en 1935 y luego de sucesivas modificaciones finalizó el 31 de diciembre de 1984. La distribución de los impuestos entre la Nación y las provincias se efectuó en 1985 sobre una base *ad hoc*, según la participación de cada una de ellas en la suma de coparticipación federal y aportes del Tesoro nacional en 1984. En 1986 y 1987 la distribución se efectuó en base a las disposiciones del Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las provincias firmado por los poderes ejecutivos provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional el 13 de marzo de 1986.

Con el proyecto que está en consideración por esta Honorable Cámara de Diputados se cubre un vacío legal en cuanto a la forma de regular las relaciones entre la Nación y las provincias. Más allá del carácter transitorio al que hice alusión, es necesario estudiar en profundidad un régimen de coparticipación federal que tenga en cuenta las particularidades que mencionaremos a continuación.

Las principales características del proyecto son las siguientes:

a) Se define la masa de impuestos coparticipables, la que de acuerdo con los artículos 2º, 8º y 9º, lo que implica que de los impuestos vigentes a la fecha la integran los siguientes tributos: a las ganancias, a los premios de sorteos y concursos deportivos, gravámenes de emergencia adicionales de aquéllos, los impuestos nacionales a la regularización impositiva, sobre los capitales y sobre el patrimonio neto, al valor agregado, internos y adicional a los aceites lubricantes, sobre la transferencia de títulos valores, sobre los beneficios eventuales, a los beneficios adicionales provenientes de inversiones de capital extranjero, sobre los débitos de entidades financieras y sobre las ventas, compras, cambio o permuta de divisas. Obviamente quedan excluidos todos los impuestos o contribuciones cuya distribución entre la Nación y las provincias se prevea asignar según otro sistema de coparticipación, o aquellos con afectación específica o a propósitos o destinos determinados, como lo establecen los incisos b) y c) del artículo 2º.

Naturalmente, no integran dicha masa de gravámenes aquellos que resultan de las facultades propias de la Nación o de aquellas que ejerza el Congreso de la Nación actuando como legislatura local, en forma equivalente a las que se reservan las provincias, tal como lo establece el artículo 9º, respecto de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria; sobre ingresos brutos; sobre la propiedad, radicación, circulación o transferencia de automotores; sellos, y transmisión gratuita de bienes.

También es conveniente aclarar que la masa distributable de los impuestos considerados por esta ley, será neta de aquellas erogaciones necesarias para estimular o facilitar el comercio exterior u otras actividades que faciliten la competencia nacional con la internacional.

Respecto de la referencia del inciso c), se excluyen de la masa a distribuir todos aquellos impuestos y contribuciones nacionales que a la fecha de la promulgación de la ley estén afectados a propósitos o destinos determinados con su actual estructura. Esta última expresión significa que deben considerarse las modificaciones, directas o indirectas, que a la legislación originaria, creadora de los impuestos y contribuciones a que alude este inciso, le hubieran introducido normas permanentes, como es el caso de las consagradas por las diversas leyes de presupuesto dictadas hasta la promulgación de esta ley.

Cristalizando aspiraciones provinciales reiteradamente manifestadas se incluyen también en la masa distributable los impuestos sobre los combustibles, "en la medida en que su recaudación exceda lo acreditado al Fondo de Combustible", incluso el creado por la ley 17.597. Para determinar dicha medida obviamente debe considerarse la afectación específica a determinados propósitos o destinos, que la legislación ha establecido en su actual estructura. Es decir que en este caso se debe tener en cuenta, para determinar el excedente a distribuir, la afectación dada a los mismos, como ocurre con el Fondo Nacional de Infraestructura del Transporte o la afectación para el pago de los intereses de la deuda externa de YPF y otros destinos que están contemplados en los incisos b), c) o d), de este mismo artículo.

b) El monto total de recursos coparticipables se distribuye en forma automática entre el Gobierno nacio-

nal y los Gobiernos provinciales, con los siguientes porcentajes:

Gobiernos provinciales: 56,66 %.
Gobierno nacional: 42,34 %.

La participación de los gobiernos provinciales del 56,66 % recoge un aspiración unánime de las provincias argentinas.

c) Se prevé el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para Emergencias y Desequilibrios Financieros de los Gobiernos Provinciales, que se formará con el uno por ciento (1 %) del monto total de recursos coparticipables. La suma resultante constituirá el importe máximo que se podrá girar al conjunto de los gobiernos provinciales en forma adicional a las distribuciones de fondos regidas por esta ley y por otros regímenes especiales.

Este fondo será distribuido por el ministerio del Interior con el objeto de mantener la necesaria transparencia que el régimen básico de distribución supone, se prevé en este proyecto que el mencionado ministerio informará trimestralmente a las provincias sobre los fondos asignados y el criterio seguido a tal fin.

d) En la distribución secundaria se recogen los coeficientes propuestos por la mayoría de los gobiernos provinciales, que reflejan la distribución prevista en el Convenio Financiero Transitorio firmado por los poderes ejecutivos en marzo de 1986, con algunas modificaciones para contemplar la situación particular de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

e) Los fondos correspondientes a la Nación y a cada uno de los gobiernos provinciales serán transferidos directamente por el Banco de la Nación Argentina, según los coeficientes fijados por esta ley.

Asimismo, resulta de singular importancia para los gobiernos provinciales la cláusula del artículo 7º, que tiene por finalidad garantizar una participación del 34 % en el total de recursos tributarios nacionales de la administración central. Como queda claro, a los efectos del cómputo se excluyen los recursos de cuentas especiales, organismos descentralizados, aquellos con afectación específica, etcétera (ya sea porque existe un mecanismo especial de coparticipación o en razón de la afectación).

3. INSERCIONES SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO MANZANO

Opiniones de los señores diputados acerca del proyecto de ley sobre régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias

a) De la señora diputada Monjardín de Masci

La Ley de Coparticipación Federal tiene raigambre de vieja data dentro de la legislación argentina.

Es una ley-convenio entre la Nación y las provincias, en virtud de la cual se establece en qué proporciones se van a distribuir los impuestos "coparticipables". No todos los impuestos son coparticipables.

Nosotros debemos sostener que todos los impuestos coparticipables deberían ser para las provincias. La Nación, a su vez, debería transferirle a las provincias muchas de las funciones que hoy aquella tiene indebidamente.

Hasta 1986, la coparticipación fue:

48,5 % para las provincias;
48,5 % para la Nación; y
3 % para un fondo de desarrollo regional.

El nuevo proyecto parece que aumenta la proporción en favor de las provincias, lo que a nuestro entender es sano. Esto último, en la medida en que las provincias asuman más funciones, que actualmente tiene a su cargo el gobierno federal.

Nos encontramos ante un proyecto que debe ser aprobado dadas las tremendas urgencias de los estados (na-

cional y provinciales) y que no ha sido suficientemente debatido y analizado con la profundidad que demanda. Considero que debería ser aprobado por un solo año, para resolver las urgencias, pero al mismo tiempo para en tal lapso poder examinar con mayor profundidad y conocimiento de causa lo que haya que hacer en definitiva.

b) *Del señor diputado Aramouni*

Los demócratas cristianos hemos apoyado el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias. No obstante ello, queremos puntualizar algunos temas con el ánimo de aclarar nuestra posición y de aportar otros elementos al sistema fiscal vigente. Este objetivo trasunta la idea de quebrar la inercia que conlleva la recaudación tradicional de los ingresos del Estado nacional.

La primera cuestión está referida al tiempo de duración del régimen que se aprueba. El artículo 15 establece su vigencia desde el 1º de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989, prorrogable automáticamente ante la inexistencia de uno sustitutivo del presente. Una vez más la transitoriedad nos invade. Estamos legislando de la misma manera en que se lo hizo con el acuerdo transitorio que se reemplaza. ¿Por qué no mirar un poco hacia el largo plazo? Probablemente cualquier legislador que reflexione sobre su propia actividad podrá observar que el problema no se resuelve. En efecto, sólo diferimos la cuestión. ¿No estaremos creando el equilibrio de la inacción?

En otro orden de cosas este proyecto no incorpora variables que reformulen el esquema coparticipativo tradicional. La controversia o el consenso en torno de este proyecto aprobado sólo pasó por incrementar o reasignar porcentajes dentro de la estructura normativa. Por ello, nuestra responsabilidad debería recrear la discusión, el enriquecimiento de las ideas, la creatividad para mutar las falencias estructurales del sistema.

En ese contexto queremos rescatar el concepto del poder originario de los municipios. Esta idea forma parte de la verdadera federalización de las provincias y del Estado contribuyendo por esta vía a la descentralización administrativa y operativa de las estructuras vigentes. El poder originario municipal tiene argumentos constitucionales (Ejemplo: provincia de Buenos Aires, "fallo Dulevich y Rébora Compañía Industrial de Construcciones y Afines") y se inscribe en las instituciones fundamentales de nuestra historia nacional y latinoamericana. En el pasado el "cabildo abierto" gestó el núcleo básico de la formación municipal. Bernardino Rivadavia al suprimir estos entes deja al pueblo sin un ejercicio participativo esencial para la aquiescencia política de las decisiones de sus dirigentes. Siguiendo esa tradición histórica, nuestra Constitución Nacional en su artículo 5º rescata la concepción comunal cuando afirma: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo, republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal..."

Es indudable que esta expresión federal debe necesariamente amalgamarse con los preceptos constitucionales provinciales. Un eminente tributarista argentino, ya

fallecido, nos dice sobre este tema: "En cuanto a la Corte Suprema de la Nación, se ha pronunciado en favor de la interpretación de que los municipios son entes administrativos delegados, omitiendo de esa manera toda tradición latinoamericana del municipio, adoptando una doctrina de origen foráneo". (*Impuesto a los ingresos brutos*, página 30, Editorial Depalma, autor Carlos María Giuliani Fonrouge.)

Este mismo autor más adelante agrega: "...aparte de esto ha considerado que la determinación del sistema económico-financiero a que deberá ajustarse la organización municipal según resulta de los artículos 104 y siguientes de la Constitución Nacional pertenece al ámbito de las facultades propias de los gobiernos locales; y los artículos 5º y 106 se reducen a ordenar el establecimiento del régimen, pero sin prefigurar el sistema económico-financiero a que deberán sujetarse".

Por todo ello descartamos la concepción del poder delegado pero aceptamos que una aplicación amplia del poder originario pueda interferir la actividad provincial y la federal, pues existen conexiones entre los sistemas tributarios que tienden a su organicidad.

También somos conocedores que ello es complejo. Pero pretendemos comenzar a tratar el tema de los municipios para descentralizar el Estado, a fin de que ellos coparticipen en la recaudación tributaria nacional y para que también coadyuven al control fiscal. Pero no nos quedamos aquí, pues ambicionamos una coparticipación inversa. Desde la célula básica al gobierno nacional, de abajo hacia arriba. Esta reforma sustancial debe ser precedida por un período de estudio y análisis prolongado para que el 31 de diciembre de 1989 no encontremos una situación atípica y conflictiva como la actual. Este poder originario va unido en lo político a la autonomía.

La introducción podría ser: ¿qué es un municipio en un gobierno federal?

La coparticipación inversa circumscribida a la recaudación tributaria no lleva implícita alteración alguna en el cuadro de poderes fiscales constitucionales para la Nación o las provincias. Solamente se modifica el sistema de recaudación, de ingreso, conservándose las facultades concurrentes, las exclusivas y las transitorias.

Este esquema no es una panacea, pero según nuestra opinión es un camino factible para obtener un avance institucional del federalismo. No tenemos la soberbia de creer que una solución de esta índole puede ser esbozada por una sola persona. Este Parlamento tiene la palabra.

En otro orden, debemos tener presente que el déficit fiscal nacional repercute sensiblemente en las finanzas provinciales, siendo necesario establecer una perfecta competencia por los fondos, como asimismo una responsabilidad emergente por la utilización de las disponibilidades propias.

Por último, deben comprometerse las administraciones fiscales provinciales, municipales y los entes federales o no de ingresos parafiscales para corregir el deterioro informativo a efectos de intercambiar datos económicos relevantes para una fiscalización y control más racional.